

90 D.P.R. 622 (1964) PUEBLO V. SOSA DÍAZ

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

EL PUEBLO DE PUERTO RICO, demandante y apelado

vs.

JOSÉ A. SOSA DIAZ, acusado y apelante

Núm. CR-63-374, CR-63-375

90 D.P.R. 622

16 de junio de 1964

SENTENCIAS de **Luis Pereyó, J.** (Humacao) condenando al acusado por infracciones a los Arts. 6 y 7 de la Ley de Armas. **Revocadas, y se decreta la absolución del acusado en ambas causas.**

1. DERECHO CONSTITUCIONAL--DEBIDO PROCEDIMIENTO DE LEY--GARANTIAS CONSTITUCIONALES EN CUANTO AL MISMO--REGISTROS, INCAUTACIONES Y ALLANAMIENTOS IRRAZONABLES-- La garantía establecida por la Sec. 10 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico protege a la ciudadanía contra un registro que, aunque legal, sea irrazonable.

2. REGISTROS E INCAUTACIONES--IRRAZONABLES O ILEGALES--MOTIVOS QUE JUSTIFICAN EL REGISTRO Y CONFISCACIÓN--Un agente del orden público puede verificar un registro sin necesidad de obtener previamente una orden de allanamiento cuando dicho registro es incidental y contemporáneo a un arresto.

3. AUTOMÓVILES--DELITOS Y PROCESOS--PROCESO Y CASTIGO--DE LA EVIDENCIA--SU ADMISIBILIDAD--REGISTROS IRRAZONABLES-- La protección constitucional contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables--garantizada por la Sec. 10 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico--se extiende a un vehículo de motor.

4. REGISTROS E INCAUTACIONES--IRRAZONABLES O ILEGALES--PERSONAS O BIENES PROTEGIDOS CONTRA REGISTROS E INCAUTACIONES SIN MANDAMIENTO DE AUTORIDAD COMPETENTE--PERSONAS ARRESTADAS-- Un registro o una incautación sin orden de allanamiento que es incidental a un arresto legal ha sido siempre considerado como un derecho limitado del Estado.

5. ID.--ID.--ID.--ID--El mero hecho de que concurra un arresto legal no convalida **ipso facto** un registro o una incautación sin orden.

6. ARRESTOS--BAJO CARGOS CRIMINALES--ARRESTOS SIN MANDAMIENTO--AUTORIDAD DE AGENTES DEL ORDEN PÚBLICO PARA VERIFICARLOS-- MOTIVOS RAZONABLES PARA CREER QUE SE HA COMETIDO O INTENTADO COMETER UN DELITO-- Las normas para definir el concepto de la **razonabilidad del arresto** --que justifique el subsiguiente registro de un automóvil y la incautación de evidencia en él transportada--se explican en la opinión.

7. REGISTROS E INCAUTACIONES--IRRAZONABLES O ILEGALES--MOTIVOS QUE JUSTIFICAN EL REGISTRO Y CONFISCACIÓN--La regla de derecho que autoriza registros coetáneos con un arresto legal--lo que implica una ausencia de mandamiento judicial de registro--se justifica: (a) por la necesidad de ocupar armas u otros objetos que puedan utilizarse por el acusado para escapar a la detención, (b) por la necesidad de evitar la destrucción de evidencia relacionada con la comisión del delito, y (c) para evitar un ataque o agresión a quienes detengan al acusado.

8. ID.--ID.--DETERMINACIÓN DE LA RAZONABILIDAD DEL MISMO--Cuando un acusado ha sido arrestado y colocado bajo custodia, un registro hecho en otro lugar sin un mandamiento judicial, simplemente no es un registro "incidental al arresto".

9. ID.--ID.--ID--El registro de un automóvil tras haberse arrestado al conductor por guiar en estado de embriaguez, y sin previamente haberse obtenido un mandamiento judicial de registro, no es razonable--y por lo tanto viola la Sec. 10 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico--cuando dicho registro: tiene lugar en ausencia del acusado, cuando ya éste había sido arrestado y se encontraba bajo custodia policiaca, en un lugar distinto y apartado de aquél en que se hallaba el vehículo.

10. ID.--ID.--ID--Se examina la evidencia para concluir que el registro del automóvil en este caso se hizo muy remotamente en tiempo y lugar para que se considere como incidental al arresto del conductor de dicho vehículo--ya que dicho registro no fue realizado para evitar la fuga del acusado, ni un ataque o agresión a quienes le habían detenido, o la destrucción de evidencia relacionada con la comisión del delito--por lo que dicho registro sin mandamiento judicial al efecto fue uno irrazonable en violación de la Sec. 10 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico.

11. ID.--ID.--PERSONAS O BIENES PROTEGIDOS CONTRA REGISTROS E INCAUTACIONES SIN MANDAMIENTO DE AUTORIDAD COMPETENTE--PERSONAS ARRESTADAS-- Un registro no se convierte en razonable por el mero hecho de que se ocupe evidencia que tienda a establecer la comisión de un delito.

12. AUTOMÓVILES--DELITOS Y PROCESOS--PROCESO Y CASTIGO--DE LA EVIDENCIA--SU ADMISIBILIDAD--REGISTROS IRRAZONABLES--En ausencia de circunstancias especiales--esto es, de la existencia de una justificación adecuada para ello--la mera comisión de una infracción menor de tránsito por el conductor de un vehículo de motor no autoriza un registro del vehículo sin mandamiento judicial.

13. DERECHO PENAL--EVIDENCIA--MATERIALIDAD Y COMPETENCIA--EVIDENCIA ILEGALMENTE OCUPADA U OBTENIDA--SUPRESIO DE LA MISMA-- Cuando la única evidencia que conecta al acusado con la comisión de los delitos que se le imputaron fue obtenida mediante un registro irrazonable--y en el acto del juicio se objeta por la defensa la admisión de tal evidencia--ésta no es admisible por mandato constitucional, y procede declarar la absolución del acusado.

Guillermo Bird Martínez, abogado del apelante.

J. B. Fernández Badillo, Procurador General, y **Peter Ortiz**, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.

Sala integrada por el Juez Presidente Señor Negrón Fernández y los Jueces Asociados Señores Blanco Lugo y Ramírez Bages.

OPINIÓN EMITIDA POR EL HON. JUEZ BLANCO LUGO

[P625] Atendiendo a una querella presentada sobre la ocurrencia de un accidente entre dos vehículos de motor, tres agentes del orden público se dirigieron a un lugar frente al parque de bombas de la población de Ceiba. Al llegar al sitio indicado observaron que el apelante José A. Sosa Díaz se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas, por lo que fue detenido y trasladado al cuartel de la policía por el agente Cecilio Ortiz. Otro policía de nombre Modesto García permaneció "cuidando" el automóvil. No presenció ni intervino en la investigación. Al regresar al sitio del accidente después de terminada la investigación, "el guardia Román abrió una puerta que estaba con los cristales hacia arriba bien abiertos, sin llave, y encontró debajo del asiento del carro, un revolvito de esos de bala blanca convertido a revólver que da muerte."¹ García aseguró que ninguna persona particular intervino con el vehículo hasta que el policía Román hizo el registro y el hallazgo del arma.

El agente Román declaró que el propósito de su búsqueda fue "a ver si había alguna bebida embriagante o algo debajo del asiento del carro" porque el apelante se encontraba en estado de embriaguez y por tal motivo había sido arrestado.² Cobra inusitada importancia la siguiente parte del testimonio de dicho testigo:

"P Y mientras Ud. buscaba en... registraba ese automóvil, **¿dónde se encontraba el acusado?**

[P626] **R En el cuartel, lo teníamos detenido en el cuartel.**

P O sea, ya él estaba en el cuartel y el automóvil estaba acá en otra calle, lejos del cuartel?

R En la Calle Las Flores.

P ¿Estaba solo el automóvil?

R No, estaba con el otro guardia que habíamos dejado.

P **¿Pero el acusado no estaba allí?**

R **No, el acusado no estaba allí.**" (Énfasis suplido.)

Es ésta en síntesis la prueba--unida a la presentación del arma en evidencia--que tuvo ante sí el juez de instancia para declarar a Sosa Díaz culpable por infracciones a los Arts. 6 y 7 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. secs. 416 y 417, consistentes en tener, poseer y portar un arma de fuego sin tener una licencia para ello expedida conforme a las prescripciones de ley. Conviene señalar que en el acto del juicio se objetó la admisión en evidencia del arma.

Las convicciones no pueden prevalecer.

[1] La Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prescribe que "no se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos **irrazonables**." Esta garantía protege a la ciudadanía contra un registro que, aunque legal, sea irrazonable.³

[2-5] Cuando el registro es incidental a un arresto los agentes del orden público pueden verificarlo sin necesidad de obtener previamente una orden de allanamiento. **United States v. Rabinowitz**, 339 U.S. 56 (1950). Ya en **Agnello v. United States**, 269 U.S. 20, 36 (1925), el Tribunal Supremo federal había expresado que "No hay duda sobre el derecho, [P627] sin orden de allanamiento, a registrar **contemporáneamente** a cualquier persona arrestada legalmente mientras comete un delito, así como el lugar en que se encuentra, con el propósito de descubrir y ocupar objetos relacionados con el delito, como los frutos del mismo, o los instrumentos usados como medios para su comisión, así como armas u otras cosas que puedan utilizarse para escapar a la custodia." En Puerto Rico, véanse, entre otros, **Pueblo v. Luciano Martínez**, 83 D.P.R. 411 (1961); **Pueblo v. Sánchez David**, 83 D.P.R. 409 (1961); **Pueblo v. Vargas**, 80 D.P.R. 296 (1958); **Pueblo v. Soto**, 77 D.P.R. 206 (1954); **Pueblo v. Pieras**, 72 D.P.R. 779 (1951). Esta protección constitucional se ha extendido específicamente a vehículos. **Brinegar v. United States**, 338 U.S. 160 (1949); **Carroll v. United States**, 267 U.S. 132 (1925). Ahora bien, como hemos indicado, el hecho de que el registro sea legal--como se alega en este caso, por ser incidental a un arresto válido--⁴ no significa necesariamente que sea razonable. En **Trupiano v. United States**, 334 U.S. 699, 708 (1948), se dijo que "Un registro o una incautación sin orden de allanamiento que es incidental a un arresto legal ha sido siempre considerado como un derecho limitado. Surge de las necesidades inherentes a las circunstancias que rodean el arresto. Pero debe haber algo más por vía de necesidad que meramente un arresto legal. El mero hecho de que concurra un arresto legal no convalida **ipso facto** un registro o una incautación sin orden."⁵

[P628] [6] La manifestación más reciente del Tribunal Supremo federal aparece contenida en la opinión emitida hace apenas unos meses--en 23 de marzo de 1964--en **Preston v. United States**, 376 U.S. 364, que por su importancia en la definición del concepto de la "razonabilidad del arresto", reproducimos casi íntegramente:

"El peticionario y otras tres personas fueron convictas en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Kentucky de conspiración para robar un banco... en violación de la sección 2113 del Título 18 del Código de Estados Unidos, basándose la convicción mayormente en evidencia obtenida al registrar un vehículo de motor. La Corte de Apelaciones para el Sexto Circuito confirmó la sentencia, rechazando las alegaciones oportunamente levantadas ante los tribunales de instancia y de apelación, de que el arresto original por una acusación de vagancia y el subsiguiente registro e incautación, habían violado la Enmienda Cuarta (cita). Expedimos certiorari (cita). En vista del resultado a que hemos llegado, no es necesario decidir si el arresto fue válido, ya que concluimos que no lo fue el registro y la incautación.

"A las tres de la madrugada la policía de Newport, Kentucky, recibió una queja por teléfono de que 'tres hombres sospechosos actuando sospechosamente' habían estado sentados en un vehículo de motor en un distrito comercial desde las 10 de la noche anterior. Cuatro policías fueron directamente al sitio donde se encontraba el carro estacionado y encontraron al peticionario y a dos acompañantes. Los policías le preguntaron a los tres hombres porqué estaban estacionados allí, pero éstos contestaron con respuestas que los policías calificaron como insatisfactorias y evasivas.... Los policías arrestaron a los tres hombres por vagancia, los registraron en busca de armas, y los trasladaron al cuartel de la policía. El carro, que no había sido registrado al momento del arresto, fue conducido por un policía hasta la estación, desde donde fue remolcado hasta un garaje. Poco después de tomar la información sobre los tres

hombres, algunos agentes fueron al garaje a registrar el carro y encontraron dos revólveres cargados en la gaveta delantera. Les fue imposible abrir el baúl y regresaron a la estación, donde un detective le dijo a un policía que regresara y tratara de abrirlo. Así lo hizo [P629] el policía, y pudo penetrar en el baúl a través del asiento trasero del carro, y allí encontró gorras, medias de mujer (una con orificios para los ojos y la boca), sogas, fundas de almohadas, una tablilla de carro ilegalmente fabricada arreglada para ajustarla sobre otra tablilla, y otros efectos. Después del registro, uno de los acompañantes del peticionario confesó que él y otros dos--no mencionó al peticionario--intentaban robar un banco en Berry, Kentucky, un pueblo como a 51 millas de Newport. Por tal motivo, la policía llamó al Negociado Federal de Investigaciones para que se hiciera cargo del caso y les entregó los artículos encontrados en el carro. Fue el uso de estos objetos, ante objeciones oportunas sobre su admisibilidad, lo que presentó la controversia que ahora consideramos relativa a la Enmienda Cuarta.

"La Enmienda dispone que:

"No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos, contra registros e incautaciones irrazonables, y no se expedirá ningún mandamiento, sino a virtud de causa probable, apoyado en juramento o afirmación describiendo particularmente el lugar a registrarse y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse."

"La cuestión de si evidencia obtenida por oficiales estatales y usada contra un acusado en un juicio federal fue obtenida por medio de un registro e incautación irrazonables se considerará como si el registro y la incautación hubiesen sido efectuados por agentes federales (cita). Nuestros casos son claros en cuanto a que el registro de vehículos de motor debe cumplir con el requisito de razonabilidad bajo la Enmienda Cuarta antes de que se pueda admitir evidencia obtenida como resultado de tales registros (citas). El sentido común nos dice que, por supuesto, cuando el registro se práctica en un vehículo de motor u otro objeto que tiene movilidad la cuestión no se puede tratar en la misma forma que cuando el registro se práctica en un inmueble como lo es una casa. Por esta razón, lo que podría considerarse como un registro irrazonable de una casa podría ser razonable en el caso de un vehículo de motor (cita). Pero aún en el caso de automóviles la prueba todavía es si el registro fue irrazonable. Por lo tanto debemos determinar si los hechos de este caso son tales como para caer dentro de alguna de las excepciones de la [P630] regla constitucional de que se necesita un mandamiento antes de que se pueda hacer un registro.

"Se adelanta que el registro y la incautación estuvieron justificados por ser incidentales a un arresto legal. Incuestionablemente, cuando se arresta legalmente a una persona, la policía tiene derecho, sin necesidad de una orden de allanamiento para registrar contemporáneamente a la persona acusada en busca de armas, de los frutos del delito u otros implementos usados para cometer un delito (citas). Este derecho para registrar e incautarse sin orden se extiende a artículos bajo el inmediato control del acusado (citas), y, hasta cierto punto, dependiendo de las circunstancias del caso, al lugar donde es arrestado (citas). La regla que permite el registro incidental se justifica, por ejemplo, por la necesidad de incautarse de armas y otros objetos que puedan ser utilizados para atacar a un agente o efectuar una fuga, así como también por la necesidad de evitar que se destruya la evidencia del delito--lo que fácilmente podría suceder cuando el arma o la evidencia se encuentran en la posesión personal del acusado o bajo su control inmediato. Pero estas razones desaparecen cuando el registro es remoto en tiempo y lugar al arresto. Una vez el acusado ha sido arrestado y colocado bajo custodia, entonces un registro

hecho en otro lugar sin un mandamiento, simplemente no es incidental al arresto (cita). Aquí, podemos asumir, como nos pide el Gobierno, que, bien porque el arresto fue válido o porque la policía tenía causa probable para creer que el carro era hurtado, la policía tenía derecho a registrar el carro cuando llegaron por primera vez al lugar de los hechos. Pero esto no decide la cuestión sobre la razonabilidad del registro efectuado más tarde y en otro lugar (cita). El registro del carro no se efectuó hasta tanto el peticionario y sus acompañantes habían sido arrestados y colocados bajo custodia en la estación de la policía y luego del carro ser remolcado hasta el garaje. En ese momento no existía peligro de que uno de los hombres arrestados pudiera usar alguna de las armas que estaban en el carro, o pudiera destruir la evidencia de un delito, asumiendo que existan artículos que sean el "fruto" o los "implementos" del delito de vagancia (cita). Tampoco existía el peligro de que el carro fuera trasladado de la jurisdicción o la localidad ya que los hombres estaban bajo arresto en la estación de policía y el carro estaba bajo custodia policiaca en el garaje (cita). Creemos que el registro se hizo muy remotamente [P631] en tiempo y lugar para que se considere como incidental al arresto, y por lo tanto, concluimos que el registro del automóvil sin mandamiento al efecto no cumplió con el requisito de razonabilidad bajo la Enmienda Cuarta."

[7-8] Como se observará, el **ration decidendi** de **Preston** es que la regla que autoriza registros coetáneos con un arresto legal se justifica por la necesidad de ocupar armas u otros objetos que puedan utilizarse para escapar a la detención, así como por la necesidad de evitar la destrucción de evidencia relacionada con la comisión del delito, pero esta justificación desaparece cuando el registro es remoto en tiempo y lugar al arresto. "Una vez el acusado ha sido arrestado y colocado bajo custodia, entonces un registro hecho en otro lugar, sin un mandamiento, simplemente no es incidental al arresto." Véase **Stoner v. California**, 376 U.S. 483, 32 U.S.L. Week (U.S. Marzo 23, 1964) 4227.

[9-10] La prueba en el caso de autos demuestra que el registro efectuado no puede ampararse bajo las justificaciones que se han aducido para los registros incidentales en casos de arrestos válidos. Como se observará, tuvo lugar en ausencia del apelante, cuando ya éste había sido arrestado y se encontraba bajo custodia policiaca, en un lugar distinto y apartado de aquél en que se hallaba el vehículo. No era, pues, necesario para evitar la fuga del acusado, ni un ataque o agresión a quienes le habían detenido, o la destrucción de evidencia relacionada con la comisión del delito por el cual se le acusaba. No fue un registro incidental al arresto. No fue un registro razonable. No podía dispensarse de la necesidad de obtener un mandamiento judicial autorizando el registro.

[11-12] Huelga decir que un registro no se convierte en razonable por el mero hecho de que se ocupe evidencia que tienda a establecer la comisión de un delito. También parece conveniente advertir que, en ausencia de circunstancias especiales, la mera comisión de una infracción menor de tránsito no autoriza un registro del vehículo. Debe existir, [P632] repetimos, una justificación adecuada para ello. Véanse, **People v. Anders**, 333 P.2d 854 (1959); **People v. Sanson**, 319 P.2d 422 (Cal. 1957); **People v.** , 300 P.2d 68 (1956); **People v. Gale**, 294 P.2d 13 (Cal. 1956); **People v. Watkins**, 166 N.E.2d 433 (Ill. 1960); **Duncan v. State**, 234 S.W.2d 835 (Tenn. 1950).

[13] Habiendo determinado que fue irrazonable el registro que produjo la única evidencia que conecta al apelante con la comisión de los delitos que se le imputaron ésta no era admisible por mandato constitucional.

Procede decretar su absolución.

NOTAS AL CALCE DE LA OPINIÓN

1. El inciso (b) del Art. 44 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. sec. 454, define arma de fuego como "cualquier arma, no importa cuál sea el nombre por el cual se la conozca, capaz de lanzar una munición o municiones por la acción de la expansión de gases."

Pendiente de la aprobación del Gobernador se encuentra el proyecto sustitutivo del P. del S. 296, cuyo propósito es prohibir la portación, conducción, transportación o posesión de armas, instrumentos o artefactos de los comúnmente conocidos como armas de bala blanca.

2. El apelante fue convicto de una violación a la Sec. 5-801 de la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A. sec. 1041, por conducir un vehículo de motor bajo la influencia de bebidas embriagantes.

3. Al oponerse a una enmienda para que se adicionara "ilegales" a continuación de "irrazonables", refiriéndose a los registros, el delegado señor Reyes Delgado expresó que "Contra la ilegalidad no hay que garantizar nada.... Por eso es que la garantía es contra registros, allanamientos irrazonables, porque en eso hay un margen de discreción, y son los tribunales los que tienen que decidir si se actuó con razonabilidad o no." Diario de Sesiones de la Convención Constituyente (ed. Equity), tomo 3, pág. 1566.

4. Sec. 5-1121(c) de la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A. sec. 1151(c); *Pueblo v. Sánchez David*, 83 D.P.R. 409 (1961); *Search and Seizure Incident to Traffic Violations*, 14 Hastings L.J. 459 (1963); *Interference with the Right to Free Movement: Stopping and Search of Vehicles*, 51 Calif. L. Rev. 907 (1963). Cf. ***People v. Molarius*, 303 P.2d 350 (Cal. 1956); *Courington v. State*, 74 So.2d 652 (Fla. 1954).**

5. Aunque el caso de Trupiano fue revocado en *Rabinowitz*, supra, esta expresión no sólo no perdió su actualidad, sino que fue ratificada a las págs. 65 y 66 de la opinión emitida en el último.